La impunidad ya no es lo que solía ser: 17 comunidades se enfrentan a las empresas madereras

Impunity is not what it used to be: 17 communities stand up to logging companies

JUSTICIA En una de las raras ocasiones en que las comunidades locales tomaron acciones legales para defenderse de las acciones perjudiciales de las empresas madereras, Brainforest estuvo allí para apoyarlas. Juntos, como parte del proyecto Voz Ciudadana para el Cambio (CV4C) apoyado por la UE y FCDO, lograron una victoria para las comunidades afectadas. Los hechos: Las comunidades cercanas a las concesiones forestales soportan la presencia de empresas madereras y actividades de tala, que reducen su acceso a tierras comunales y alteran sus vidas. Por lo tanto, los miembros de la comunidad deben recibir compensación de las empresas y compartir los beneficios, de acuerdo con las especificaciones de un acuerdo contractual (cahier des charges). En la República de Gabón, la Orden 105/2014 del 6 de mayo de 2014 establece que se deben pagar 800 FCFA/m3 (USD 1.43), calculados sobre el volumen de la explotación anual, en un Fondo de Desarrollo Local (LDF) para proyectos de interés colectivo, supervisados por un comité de gestión de proyectos (CGSP). Lo que realmente sucede es bastante diferente. Durante misiones de monitoreo independiente para evaluar la legalidad de las operaciones de tala, los miembros de Brainforest, una organización de derechos ambientales y de comunidades e indígenas, habían estado escuchando cómo las empresas madereras estaban eludiendo sus obligaciones de compartir beneficios con las comunidades. Grace Ntsame-Ollomo, oficial legal de Brainforest, explica: “Adoptamos una visión amplia de nuestro mandato de monitoreo independiente; para Brainforest, incluye no solo aspectos forestales, sino también todo lo relacionado con las obligaciones sociales. Por lo tanto, fuimos a la provincia de Ogooué-Ivindo para verificar los rumores, para ver por nosotros mismos si los contratos se estaban implementando.” Descubrieron un incumplimiento generalizado de las obligaciones sociales. Los LDF estaban vacíos o casi vacíos. Típicamente, los proyectos comunitarios, debidamente validados por el CGSP, aún no recibían financiamiento; los pocos proyectos que habían sido financiados y comenzados, eran rutinariamente abandonados en el camino. A veces, las escuelas se quedaban sin bancos o mesas, o caían en el abandono antes de ser utilizadas; las serpientes habían tomado áreas donde se suponía que estaría el albergue, donde debería haber sido alojado un maestro. A veces, la evaluación del volumen de madera no se había realizado durante años. En la gran mayoría de los casos, la población no había recibido nada. Ntsame-Ollomo añade: “La ley actual no prevé una sanción adjunta a esta obligación; no hay un incentivo para el cumplimiento, así que generalmente los operadores talan y cuando terminan, recogen y se van.” La impunidad no es lo que solía ser: 17 comunidades se enfrentan a las empresas madereras La ONG gabonesa Brainforest ha utilizado los rigurosos datos recopilados a través de sus actividades de monitoreo forestal independiente para apoyar la litigación comunitaria – y ganar. Gabón Alojamientos inacabados para maestros en el pueblo de Mbess

-- 1 de 3 --

El resultado fue una situación deplorable para las comunidades que inspiró indiferencia entre las autoridades forestales. Habiendo agotado todos los remedios amistosos sin éxito, las comunidades se habían topado con un muro. El cahier des charges no es una promesa sin sentido; constituye un contrato de derecho civil. Las empresas simplemente contaban con el hecho de que las comunidades no tendrían las herramientas para navegar por los pasillos de la justicia. Pero Brainforest sí las tiene. Acción legal: Con el consejo de un abogado y el apoyo de CV4C, Brainforest asistió a las comunidades; reunió las pruebas, redactó las quejas y presentó una única acción civil ante el Tribunal de Primera Instancia de Makokou el 30 de agosto de 2019

que unió a 17 comunidades contra nueve empresas madereras. Siendo la primera vez que las comunidades se atrevían a defenderse de esta manera, el caso causó revuelo localmente. En el contexto de la disputa, incluso el administrador regional fue interrogado por el tribunal en su calidad de presidente del CGSP; no dudó en llamar a Brainforest para expresar su descontento en un tono amenazante. Ntsame-Ollomo aclara las cosas. “Rápidamente lo pusimos en su lugar indicando que era una acción legal de buena fe, que los hechos no eran incorrectos, y señalamos que él, como presidente del comité de gestión del fondo, no había hecho nada para resolver la situación.” El caso debió haber provocado la ira del juez: su decisión a favor de las comunidades fue emitida solo un mes después, el 30 de septiembre de 2019. Se ordenó a las empresas pagar todo lo que debían a las comunidades desde 2014 hasta 2018 − un total de 120,966,787 FCFA (USD 215,970) − en el LDF. ¿Y luego qué? Sería algo hermoso si la historia pudiera terminar con el pago adecuado de los atrasos, pero la realidad es más compleja. “Ahora estamos atrapados en un gran enfrentamiento,” suspira Ntsame-Ollomo. De hecho, de las nueve empresas condenadas, algunas no pueden ser encontradas − o han abandonado la zona, o han cambiado su nombre para ocultar mejor su engaño − otras están siendo obstructivas, una probablemente está en quiebra. “Estamos manteniendo la presión,” dice Ntsame-Ollomo. Brainforest ha iniciado dos procedimientos más, esta vez en su propia capacidad y con el apoyo continuo de CV4C. Una acción civil pretende obligar a las empresas a pagar. Se están llevando a cabo procedimientos penales contra tres subcontratistas que se suponía debían llevar a cabo los proyectos de interés local, y que recibieron la totalidad del pago pero no completaron el trabajo. Brainforest ha aprendido además que, tras bambalinas, una mano política está tratando de apoderarse de algunos de estos fondos. “Esto es mucho dinero, y muchos ojos están puestos en ello.” Más alentadoramente, una de las nueve empresas contactó a Brainforest para decir que había establecido un programa de pagos, que las cantidades adeudadas se comenzarían a pagar a partir de octubre de 2020, y que los proyectos tan esperados se completarían para abril de 2021. “En la gran mayoría de los casos, la población no había recibido nada.”

-- 2 de 3 --

No en vano Este caso judicial está lejos de ser un ejercicio en futilidad. Entre los resultados positivos para las comunidades forestales está el aumento de la credibilidad de Brainforest: su experiencia ahora es solicitada por el sector privado para ayudarles a cumplir con las obligaciones sociales antes de que ocurran problemas. Quizás las empresas han visto la escritura en la pared: Para poner fin a las “prácticas mafiosas” en el sector maderero, Gabón ha emitido un llamado al orden, exigiendo a las empresas madereras certificar sus operaciones para 2022. El cumplimiento de las obligaciones sociales es una condición de certificación. La batalla aún no se ha ganado, pero ha comenzado una lucha mucho más grande. Este caso inmediato concierne solo a la provincia de Ogooué-Ivindo, pero el incumplimiento de las obligaciones sociales es rampante y sus repercusiones afectan a casi todas las comunidades afectadas por la tala en todo Gabón. Brainforest continúa proporcionando a las comunidades las herramientas que necesitan para defender mejor sus derechos contra empresas forestales sin escrúpulos. Las comunidades están comenzando a darse cuenta de que pueden tomar medidas, y este ejemplo muestra que el éxito en la sala del tribunal es posible. Las comunidades están recuperando la esperanza. La ONG atribuye el éxito al Monitoreo forestal independiente – interpretado de manera amplia. Ntsame-Ollomo dice: “Queríamos ir más allá de las tareas de analizar y hacer recomendaciones; queríamos ver las cosas hasta el final. Queríamos asegurarnos de que las voces de los ciudadanos se escucharan en voz alta. Hemos logrado avances concretos: No hemos escuchado comentarios negativos, ni contraargumentos. Las poblaciones locales ven que estamos comprometidos, y nos alegra ver que muchos de ellos confían en nosotros, y se dirigen a nosotros para que podamos acompañarlos en sus actividades – ese es nuestro mayor logro.” Entrevista con Grace Ntsame-Ollomo, 17 de septiembre de 2020;

Nicole Gérard “Nos alegra ver que muchas poblaciones locales confían en nosotros, y se dirigen a nosotros para que podamos acompañarlos en sus actividades − ese es nuestro mayor logro.” 17 Comunidades que se atrevieron a defenderse en los tribunales, con la ayuda de Brainforest y el apoyo de CV4C 1 Acción legal ganada por las comunidades 9 Empresas forestales que fueron ordenadas a pagar compensación 8 Misiones de monitoreo forestal independiente realizadas con el apoyo de CV4C 1 Video en el que resuenan las voces de las comunidades 1 Orden 105 de la Orden 105/2014 del 6 de mayo de 2014 que fija el modelo de acuerdo contractual previsto en el Artículo 251 de la Ley 16-01 del 31 de diciembre de 2001 (Código Forestal de la República de Gabón) 1 Llamado al orden por parte del Gobierno de Gabón, exigiendo a las empresas madereras certificar sus operaciones 1 Propuesta de enmienda de las normas actuales destinada a adjuntar sanciones a la delincuencia con respecto al cahier de charges − actualmente atascada en el parlamento nacional. A VISTA DE PÁJARO Dirigido por el Centro de Desarrollo Internacional y Capacitación de la Universidad de Wolverhampton (CIDT), el proyecto 'Voces Ciudadanas para el Cambio (CV4C)' fue diseñado para establecer una asociación fuerte y sostenible de actores no estatales de monitoreo forestal (NSA) o actores de la Sociedad Civil en Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón y República del Congo. El proyecto buscó abordar este desafío fortaleciendo la capacidad, influencia y viabilidad a largo plazo de las organizaciones IM para realizar funciones esenciales de vigilancia. Obtén más información en https://cidt.org.uk/cv4c.